Resolución No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que, a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

Que mediante Resolución Corporativa radicada N° RE-05191-2021 del 5 de agosto de 2021, se delegaron unas funciones al jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación.

Que a través de la Resolución RE-02025 del 12 de junio de 2026, se nombró al señor John Eduer Marín Morales en el cargo denominado Jefe de Oficina (Jurídica), Código 0137, Grado 19, empleo de Libre Nombramiento y Remoción.

SITUACIÓN FÁCTICA

Que mediante Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0230855, radicada en Cornare como CE-09557-2026 del 28 de mayo de 2026, se pusieron a disposición de esta Autoridad Ambiental 9,3 m^3 de madera en primer grado de transformación de la especie comúnmente conocida como ciprés *(Cupressus lusitánica)*, los cuales fueron incautados por miembros de la Policía, en la vereda El Caudal del municipio de Abejorral el día 28 de mayo de 2026, al señor Jaider de Jesús Giraldo García identificado con cédula de ciudadanía N° 80.159.435, pues al momento del control el conductor presentó dos salvoconductos sin vigencia.

Que mediante informe técnico IT-03260-2026 del 03 de junio de 2026, se realizó la evaluación del material forestal puesto a disposición de la Corporación y se concluyó lo siguiente:

"26. CONCLUSIONES:

- *La flora maderable objeto de decomiso asociada al expediente* ***050023447085****, correspondió a productos en primer grado de madera*

*rolliza con un volumen de 9,3 m³, de la especie **Cupressus lusitánica (Cipres).** Una vez realizada la evaluación técnica se evidencia que la flora maderable se encuentra en buen estado, sin presencia de hongos o enfermedades y en estado verde.*

- *La flora maderable corresponde a individuos de especies exóticas, la cual proviene posiblemente de plantaciones forestales del municipio de Abejorral, la cual se movilizaba si un documento válido para amparar su aprovechamiento y transporte.*
- *De acuerdo a la valoración inicial de la flora ingresados al CAV Flora de la Corporación, la calificación de la importancia de la afectación es: **LEVE.***
- *Es necesario registrar la información en el SILOP, de acuerdo a lo estipulado en presente informe".*

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que mediante la Resolución con radicado RE-01904-2026 del 05 de junio de 2026, notificada por aviso publicado en página web el día 10 de julio de 2026, se inició un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental al señor Jaider de Jesús Giraldo García, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.159.435, en razón al siguiente hecho:

> *"Movilizar de 9,3 m³ de madera en primer grado de transformación de la especie comúnmente conocida como Ciprés (Cupressus lusitanica), los cuales fueron incautados por miembros de la Policía Nacional en la vereda El Caudal del municipio de Abejorral, el día 28 de mayo de 2026, sin contar con un salvoconducto vigente que amparara legalmente su transporte. Lo anterior fue puesto a disposición de Cornare mediante Acta Única de Control al Tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0230855, radicada en Cornare como CE-09557-2026 del 28 de mayo de 2026".*

Adicionalmente, en la referida actuación se le impuso la siguiente medida preventiva:

> ***"ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER** medida preventiva de **APREHENSIÓN PREVENTIVA** de 9,3 m³ de madera en primer grado de transformación de la especie comúnmente conocida como Ciprés (Cupressus lusitanica), los cuales fueron incautados por miembros de la Policía Nacional en la vereda El Caudal del municipio de Abejorral, el día 28 de mayo de 2026, pues al momento del control el conductor presentó dos salvoconductos sin vigencia. Lo anterior fue puesto a disposición de Cornare mediante Acta Única de Control al Tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0230855, radicada en Cornare como CE-09557-2026 del 28 de mayo de 2026. La medida preventiva se impone al señor **JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA** identificado con cédula de ciudadanía 80.159.435".*

FORMULACIÓN DE CARGOS

Que una vez evaluado el contenido del Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0230855, radicada como CE-09557-2026 del 28 de mayo

de 2026 y el Informe técnico con radicado IT-03260-2026 del 03 de junio de 2026, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño o infracción a la normatividad, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño o infracción y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño o infracción, es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño o infracción, sino que es necesario que este haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: *"(…) 7.10. La Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 8, Ley 1333 de 2009) Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333 de 2009). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales". (…).*

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, "*Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto con radicado AU-03088-2026 del 21 de agosto de 2026, notificado por aviso publicado en página web el día 01 de octubre de 2026, a formular el siguiente pliego de cargos al señor Jaider de Jesús Giraldo García:

> *"**CARGO ÚNICO:** Movilizar 9,3 m³ de madera en primer grado de transformación de la especie comúnmente conocida como Ciprés (Cupressus lusitanica), los cuales fueron incautados por miembros de la*

Policía Nacional en la vereda El Caudal del municipio de Abejorral, el día 28 de mayo de 2026, sin portar un salvoconducto vigente que amparara legalmente su transporte. Esto fue puesto a disposición de Cornare mediante Acta Única de Control al Tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0230855, radicada en Cornare como CE-09557-2026 del 28 de mayo de 2026. Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015".

DESCARGOS

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, mediante auto con radicado AU-03088-2026 del 21 de agosto de 2026, se formuló pliego de cargos y se otorgó un término de 10 días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se le informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito.

Que, trascurrido el término otorgado se evidencia que el investigado no hizo uso de esta oportunidad procesal.

DE LA PRÁCTICA DE PRUEBAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, modificado por la Ley 2387 de 2024, se establece que: *"(…) la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas".*

De otro lado el artículo 8 de la Ley 2387 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley 1333 de 2009, se estableció que *"(…) a partir de la vigencia de la presente ley, el procedimiento sancionatorio ambiental previsto en la ley 1333 de 2009 tendrá la etapa de alegatos de conclusión de que trata el artículo 48 de la ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya. Los alegatos de conclusión procederán únicamente cuando se hayan practicado pruebas en el periodo probatorio previsto en el artículo 26 de la ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya."*

Dicho lo anterior, se verifica que el investigado no solicitó la práctica de pruebas ni aportó elementos probatorios adicionales dentro de la oportunidad procesal correspondiente. Asimismo, una vez, analizado el expediente, se concluye que el material probatorio legal y oportunamente recaudado durante el trámite administrativo resulta suficiente para adoptar una decisión de fondo, sin que existan hechos controvertidos que requieran la apertura de un período probatorio ni el decreto de pruebas de oficio.

En consecuencia, al no disponerse la apertura de la etapa probatoria dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, no hay lugar a la presentación de alegatos de conclusión. Por lo anterior, y encontrándose reunidos los elementos necesarios para resolver de fondo la actuación, se procederá a proferir el correspondiente acto administrativo de determinación de responsabilidad ambiental.

EVALUACIÓN DEL CARGO FORMULADO AL PRESUNTO INFRACTOR

Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado al señor Jaider de Jesús Giraldo García, con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y de las pruebas obrantes en el proceso toda vez que el investigado no ejerció su derecho de defensa:

El cargo imputado fue el siguiente:

> ***CARGO ÚNICO:*** *Movilizar 9,3 m³ de madera en primer grado de transformación de la especie comúnmente conocida como Ciprés (Cupressus lusitanica), los cuales fueron incautados por miembros de la Policía Nacional en la vereda El Caudal del municipio de Abejorral, el día 28 de mayo de 2026, sin portar un salvoconducto vigente que amparara legalmente su transporte. Esto fue puesto a disposición de Cornare mediante Acta Única de Control al Tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0230855, radicada en Cornare como CE-09557-2026 del 28 de mayo de 2026. Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015.*

Con la conducta descrita en el cargo, se contravino a lo dispuesto en el **artículo 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015,** que dispone:

> **"*Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización.*** *Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final.*
>
> ***"Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores****. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la ley".*

En el caso concreto, mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N.° 0230855, radicada en Cornare con el CE-09557-2026 del 28 de mayo de 2026, se dejó constancia de la incautación y puesta a disposición de esta Autoridad Ambiental de 9,3 m³ de madera en primer grado de transformación, de la especie ciprés (*Cupressus lusitanica*), material que era transportado por el señor Jaider de Jesús Giraldo García en la vereda El Caudal del municipio de Abejorral, el día 28 de mayo de 2026. Según lo consignado en dicha actuación, al momento del control el conductor presentó dos salvoconductos que no se encontraban vigentes al momento del procedimiento, uno de ellos se encontraba vencido y el otro tenía una fecha posterior, es decir, ninguno de ellos tenía el 28 de mayo como fecha dentro de la vigencia.

Esta circunstancia resulta determinante para establecer la infracción investigada, toda vez que la obligación legal no se satisface con la simple exhibición de documentos relacionados con productos forestales, sino que exige que el salvoconducto se encuentre vigente y ampare efectivamente el material que está siendo movilizado. Por consiguiente, la presentación de documentos que no se

encuentran vigentes, no permite acreditar, por sí sola, la legalidad del transporte ni verificar que la madera incautada correspondiera a los productos forestales amparados por aquellos.

En efecto, la vigencia del salvoconducto constituye un elemento esencial para garantizar la trazabilidad y el control de la movilización de los productos forestales. Cuando el documento presentado no tiene vigencia, no puede considerarse suficiente para respaldar el transporte realizado, salvo que exista otro soporte jurídico válido que demuestre que la movilización se encontraba legalmente amparada. En este caso, de acuerdo con los antecedentes descritos, el señor Giraldo presentó dos salvoconductos sin vigencia y no se evidencia que contara con un documento que amparara los 9,3 m³ de madera transportados el día de los hechos, es decir, el 28 de mayo de 2026.

En este punto resulta pertinente señalar que el artículo 2.2.1.1.13.2 del Decreto 1076 de 2015 establece los requisitos que deben contener los salvoconductos para la movilización entre lo cuales se encuentra la autoridad ambiental que lo expide, el titular del aprovechamiento, las fechas de expedición y vencimiento, el origen y destino final de los productos, la identificación de la especie mediante su nombre común y científico, el volumen, la cantidad o el peso autorizado, así como el medio de transporte y su identificación, entre otros datos.

De esta regulación se desprende que el salvoconducto no constituye un documento meramente formal, sino el instrumento que permite verificar la legalidad, trazabilidad e identidad de los productos forestales movilizados, así como las condiciones específicas bajo las cuales se autorizó su transporte. Por consiguiente, para que dicho documento pueda servir como amparo válido, debe encontrarse vigente al momento de la movilización y permitir establecer una correspondencia verificable entre la información autorizada y el material efectivamente transportado, particularmente en cuanto a la especie forestal, el tipo de producto, el volumen o cantidad, el origen, el destino y el vehículo utilizado, según corresponda.

En el caso concreto, se indicó por parte de la Policía que el señor Jaider de Jesús Giraldo García presentó dos salvoconductos que no se encontraban vigentes, uno con una fecha que ya había pasado y otro con una fecha posterior. En consecuencia, dichos documentos no permitían amparar válidamente la movilización efectuada en esa fecha ni acreditar, por sí mismos, que los 9,3 m³ de madera de ciprés (Cupressus lusitanica) transportados correspondieran a productos forestales cuya movilización estuviera legalmente autorizada para ese momento.

Así las cosas, la sola presentación de los dos salvoconductos no desvirtúa la conducta investigada, toda vez que la exigencia prevista en los artículos 2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.13.2 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015 no se satisface con la exhibición de documentos vencidos o que no han llegado a su fecha de vigencia, sino con la acreditación de un amparo documental vigente y correspondiente al material forestal efectivamente movilizado. Por tanto, al no haberse acreditado la existencia de un salvoconducto vigente que amparara el transporte realizado el 28 de mayo de 2026, se configura el incumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con la movilización de productos forestales.

En consecuencia, este elemento, valorado conjuntamente con el acta de control y el Informe Técnico IT-03260-2026 del 3 de junio de 2026, respalda la conclusión de que el material forestal era transportado sin un documento vigente que acreditara

legalmente su movilización, conducta que se adecua al cargo único formulado al señor Jaider de Jesús Giraldo García.

De otro lado, transcurrido el presente procedimiento y tras contar con las etapas procesales correspondientes, el investigado no ejerció su derecho de defensa y contradicción, no desvirtuó la presunción de culpa y dolo establecida para este procedimiento, ni demostró ninguna causal de cesación o de exoneración de responsabilidad, dejando así para el caso concreto, mérito suficiente para sancionarlo, por cuanto la Entidad tiene probado el componente objetivo de la infracción, sin que el investigado lograra desvirtuar el componente subjetivo de la misma.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados.

La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior *"proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la conservación de un ambiente sano".*

De acuerdo con lo anterior, ha de entenderse que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de esta acarrea la imposición de las sanciones legales vigentes.

En consecuencia, valorado el material probatorio obrante en el expediente y al no haberse desvirtuado la presunción legal de culpa o dolo, esta Autoridad Ambiental encuentra plenamente acreditada la infracción en cabeza del señor JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA por movilización de material forestal sin el amparo correspondiente de acuerdo a lo consagrado en los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual se procederá a declararla responsable por la comisión de la infracción ambiental objeto de investigación.

CONSIDERACIONES FINALES

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente **N° 050023447085** en el cual se adelanta el procedimiento sancionatorio en contra del señor JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.159.435, es claro para este Despacho que el investigado infringió la normatividad

ambiental descrita y es responsable frente al cargo formulado por medio del Auto con radicado AU-03088-2026 del 21 de agosto de 2026.

Además, no hay evidencia de que se configure alguna de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024, a saber:

1. *Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890.*
2. *El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista.*

Al respecto, en la conducta descrita en el cargo que prospera no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles.

Así mismo ha encontrado este Despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación esta, que, una vez valorado el expediente, no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio ambiental.

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos del señor JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA, de forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin.

FUNDAMENTOS LEGALES

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida también como Constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala*: "Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."

Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su artículo 30, establece: "Objeto*. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna*

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."

En el mismo sentido el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, modificado por la Ley 2387 de 2024, dispone: *"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y lo ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y Parques Nacionales Naturales de Colombia, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".*

Parágrafo. *En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas y sancionatorias. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa, en los términos establecidos en la presente Ley, la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales".*

Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece*: "Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.*

Parágrafo 1: *En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla, en los términos establecidos en la presente Ley. (…).*

Parágrafo 2: *El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión". (…).*

A. Sobre el levantamiento de la medida preventiva

Que la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, dispone lo siguiente en su artículo 12: *"… **Objeto de las medidas preventivas**. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana."*

Y en el artículo 35 de la misma normatividad se establece que: *"**LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS**. Las medidas preventivas se levantarán de*

oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron."

Que el parágrafo 2 del artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, dispone lo siguiente:

> **"PARÁGRAFO *2*.** *En todo caso, la medida preventiva se levantará una vez se cumplan las condiciones impuestas para tal efecto, en los términos que dispone el artículo 35 de la presente Ley, o hasta la expedición de la decisión que ponga fin al procedimiento; la cual se pronunciará sobre su levantamiento".*

En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que se impondrá la sanción de decomiso definitivo sobre la totalidad del material forestal incautado, es procedente levantar la medida de aprehensión preventiva impuesta mediante la Resolución con radicado RE-01904-2026 del 05 de junio de 2026. Ello teniendo en cuenta que la medida será sustituida por una decisión definitiva.

DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la misma ley.

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, el decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos *y* subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, y el Decreto 1076 de 2015.

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer una sanción consistente en el **DECOMISO DEFINITIVO** del material forestal incautado, al señor JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.159.435, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo con el cargo formulado mediante Auto con radicado AU-03088-2026 del 21 de agosto de 2026 y conforme a lo expuesto arriba.

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones acorde a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes instrucciones:

El Decreto 1076 de 2015, establece como causales para imponer este tipo de sanción, las siguientes:

> ***"Artículo 2.2.10.1.2.5. Decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y subproductos de la fauna y la flora,***

***elementos, medios o implementos utilizados para cometer infracciones ambientales**. El decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados para cometer infracciones ambientales, se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios:*
a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los reglamentos;
b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente;
c) Para corregir un perjuicio sobre los especímenes.

Que en virtud de lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y del informe técnico con radicado IT-03260-2026 del 03 de junio de 2026 estableció lo siguiente:

*"**24. ANTECEDENTES**:*

*Mediante acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna n°**0230855**, con radicado CE-09557-2026 del 28 de mayo de 2026; personal del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales del Departamento de Policía de Antioquia, pone a disposición de CORNARE, productos forestales maderables, mediante incautación preventiva en procedimiento realizado el día 28/05/2026, en acciones de control ambiental, los cuales se encontraban sin el respectivo documento legal que ampara su aprovechamiento y transporte y se transportaban en el vehículo tipo camión planchón con placa WNO 369. El acta registra 9,3 m^3 de la especie pino cipres, la cual se encontraba dimensionada en rolos de diámetros pequeños.*
En el acta se registra como declaración del presunto infractor que "tenía los salvoconductos" pero al verificar por parte de la policía tenía para el 30 de mayo de 2026 y uno sin vigencia para el 15 de mayo de 2026.
(…)
26.CONCLUSIONES:

- *La flora maderable objeto de decomiso asociada al expediente **050023447085**, correspondió a productos en primer grado de madera rolliza con un volumen de 9,3 m^3, de la especie **Cupressus lusitánica (Cipres).** Una vez realizada la evaluación técnica se evidencia que la flora maderable se encuentra en buen estado, sin presencia de hongos o enfermedades y en estado verde.*
- *La flora maderable corresponde a individuos de especies exóticas, la cual proviene posiblemente de plantaciones forestales del municipio de Abejorral, la cual se movilizaba sin un documento válido para amparar su aprovechamiento y transporte.*
- *De acuerdo a la valoración inicial de la flora ingresados al CAV Flora de la Corporación, la calificación de la importancia de la afectación es: **LEVE.***
- *Es necesario registrar la información en el SILOP, de acuerdo a lo estipulado en presente informe".*

De acuerdo con el referido informe, se encuentra probado en la presente investigación sancionatoria, que los especímenes se movilizaron sin el cumplimiento a cabalidad de las normas establecidas; así pues, la imposición del decomiso definitivo resulta necesario debido a que el material objeto de aprehensión corresponde a productos forestales movilizados incumpliendo las normas establecidas por el Decreto 1076 de 2015. La imposición del decomiso definitivo resulta idónea y proporcional, en tanto recae directamente sobre el producto involucrado en la conducta infractora, garantiza la efectividad de las medidas de control forestal y desestimula la movilización de productos forestales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad ambiental, evitando que recursos naturales renovables circulen al margen de los mecanismos de trazabilidad previstos por el ordenamiento jurídico. La permanencia del material en poder del infractor frustraría la finalidad preventiva y correctiva del régimen sancionatorio ambiental, razón por la cual el decomiso constituye la medida idónea para proteger el recurso natural y generar un efecto disuasivo sobre este tipo de conductas.

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el Procedimiento Sancionatorio al señor JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA, procederá este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente.

Por mérito en lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor **JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 80.159.435, del cargo único formulado mediante Auto con radicado AU-03088-2026 del 21 de agosto de 2026, por encontrarse probada su responsabilidad, por infracción de Riesgo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor **JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 80.159.435, una sanción consistente en el **DECOMISO DEFINITIVO** de 9,3 m^3 de madera en primer grado de transformación de la especie comúnmente conocida como Ciprés *(Cupressus lusitanica),* de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: LEVANTAR la medida de aprehensión preventiva impuesta al señor **JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 80.159.435, mediante la Resolución con radicado RE-01904-2026 del 05 de junio de 2026, toda vez que la sanción de decomiso definitivo se impone sobre la totalidad del material forestal decomisado, así, la medida preventiva agotó su finalidad cautelar al ser sustituida por una decisión definitiva dentro del procedimiento sancionatorio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, para tal efecto se ordena a la Oficina de Gestión Documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorios@cornare.gov.co

ARTÍCULO QUINTO: INGRESAR al señor **JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 80.159.435, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, modificado por la Ley 2387 de 2024, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de Cornare, a través de la página web, lo resuelto en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, al señor **JAIDER DE JESÚS GIRALDO GARCÍA.**

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHN EDUER MARÍN MORALES
Jefe de Oficina Jurídica

Expediente: 050023447085.
Fecha: 21/10/2026
Proyectó: Paula Alzate.
Revisó: Lina Gómez.
Técnico: León Montes.
Dependencia: Gestión de la Biodiversidad AP y SE.